

Government at a Glance: Latin America and the Caribbean 2024



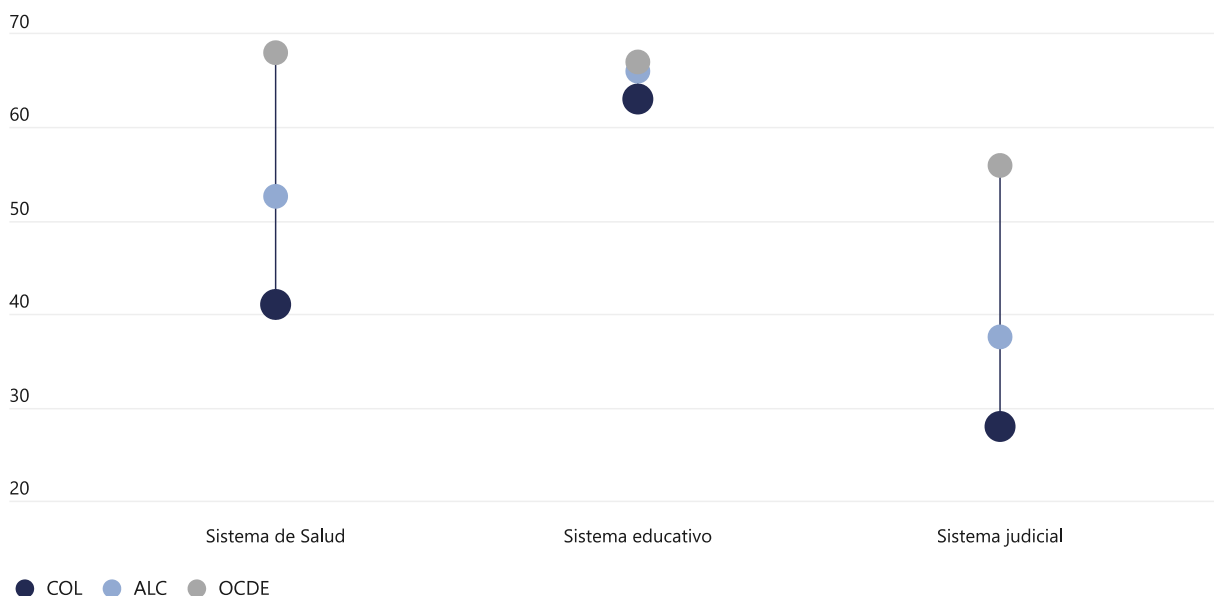
Colombia

Confianza y satisfacción con los servicios públicos

La confianza en las instituciones públicas y la satisfacción con los servicios públicos son resultados importantes de la calidad de la gobernanza pública. Reflejan la percepción que tienen los ciudadanos de la competencia del gobierno en el diseño de políticas públicas y la prestación servicios, así como sus expectativas sobre el comportamiento de las instituciones y los funcionarios públicos. La satisfacción con los servicios públicos y la confianza en las instituciones públicas, aunque no son resultados necesarios de la gobernanza democrática, pueden mejorar la eficacia de la gobernanza fomentando la participación en la vida pública, el cumplimiento de las políticas públicas y la cohesión social.

La mayoría de los colombianos están satisfechos con el sistema educativo, mientras que la satisfacción con los sistemas de salud y judicial está por debajo del promedio de ALC. Se estima que el 63% de los colombianos están satisfechos con el sistema educativo, un porcentaje inferior al promedio de ALC (66%) y de la OCDE (67%). El sistema de salud tiene un índice de satisfacción del 41%, que es inferior a la media de ALC por 12 puntos porcentuales (p.p.) y a la media de la OCDE por 27 p.p. Solo el 28% de los colombianos están satisfechos con el sistema judicial, porcentaje inferior a la media de ALC por 10 p.p.

Gráfico 1. Satisfacción con los servicios públicos, 2022



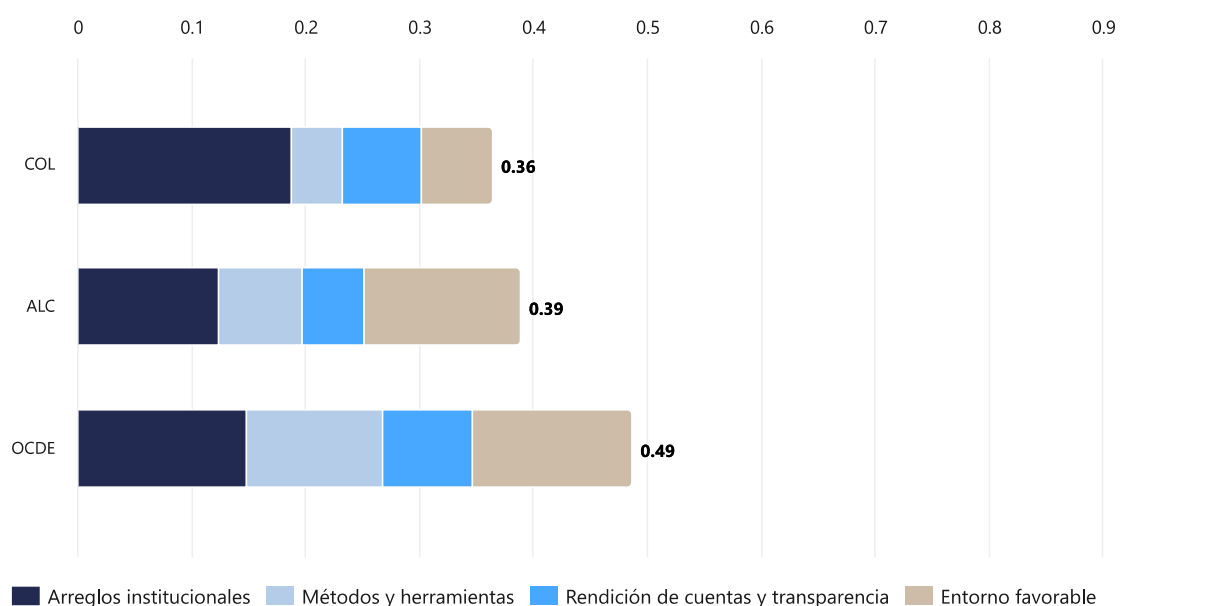
Buena gobernanza para la inclusión y la sostenibilidad

En una época de crisis múltiples, los países de América Latina y el Caribe necesitan adoptar prácticas de buena gobernanza que fomenten la inclusión y la sostenibilidad, elementos cruciales para promover la prosperidad y la resiliencia democrática. Entre las acciones clave están construir sobre las fortalezas de la democracia, incluyendo mejorar la participación de las partes interesadas en la toma de decisiones, así como fomentar la representación y la inclusión en la fuerza laboral pública. Además, los esfuerzos deben centrarse en reforzar las competencias clave para lograr un crecimiento inclusivo y sostenible, incluidos los enfoques presupuestarios y de contratación pública que apoyen la transición verde. Asimismo, la protección contra las amenazas a los valores democráticos exige que se mantengan normas eficaces de integridad pública y regulaciones sólidas contra las influencias indebidas.

Las prácticas de gestión presupuestaria, como la presupuestación verde, pueden ayudar a hacer frente a la crisis climática y a alcanzar objetivos medioambientales. Los mecanismos de presupuestación verde incluyen marcos institucionales para evaluar los impactos ambientales de las políticas presupuestarias y fiscales, métodos para evaluar su coherencia, mecanismos para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, y un entorno favorable para la presupuestación verde. Sólo unos pocos países de ALC han adoptado mecanismos de presupuestación verde y su aplicación podría ser más efectiva.

Colombia se sitúa cerca de la media de ALC en presupuestos verdes, con una puntuación de 0.36 en una escala de 0 a 1, frente a 0.39 (ALC) y 0.49 (OCDE). La dimensión más fuerte de Colombia son los arreglos institucionales, con una puntuación de 0.19 sobre un máximo de 0.25. Hay margen de mejora en métodos y herramientas (0.05), rendición de cuentas y transparencia (0.07) y entorno favorable (0.06).







Gráfico 2. Índice sobre Presupuestación Verde de la OCDE, 2022



La contratación pública -la compra de bienes, servicios y obras por parte de los gobiernos y las empresas estatales- representó un promedio del 17.4% del gasto público total en los países de América Latina y el Caribe en 2021. Las administraciones públicas están adoptando cada vez más la contratación pública como instrumento de política estratégica para promover objetivos sociales, por ejemplo, para fortalecer la sostenibilidad y la responsabilidad medioambiental, favoreciendo la contratación verde y la conducta empresarial responsable, y para fortalecer la inclusión, incentivando la participación de diferentes grupos de personas y empresas como proveedores.

Colombia ha desarrollado una estrategia a nivel central de gobierno para promover la contratación pública verde y promover la participación de las PYME en los procesos de contratación pública. Algunas agencias de contratación han desarrollado estrategias internas para promover prácticas empresariales responsables. En comparación, 14 países de ALC cuentan con una estrategia del gobierno central para promover la participación de las PYMES en la contratación pública, 9 países para la contratación pública verde y 7 para la conducta empresarial responsable.

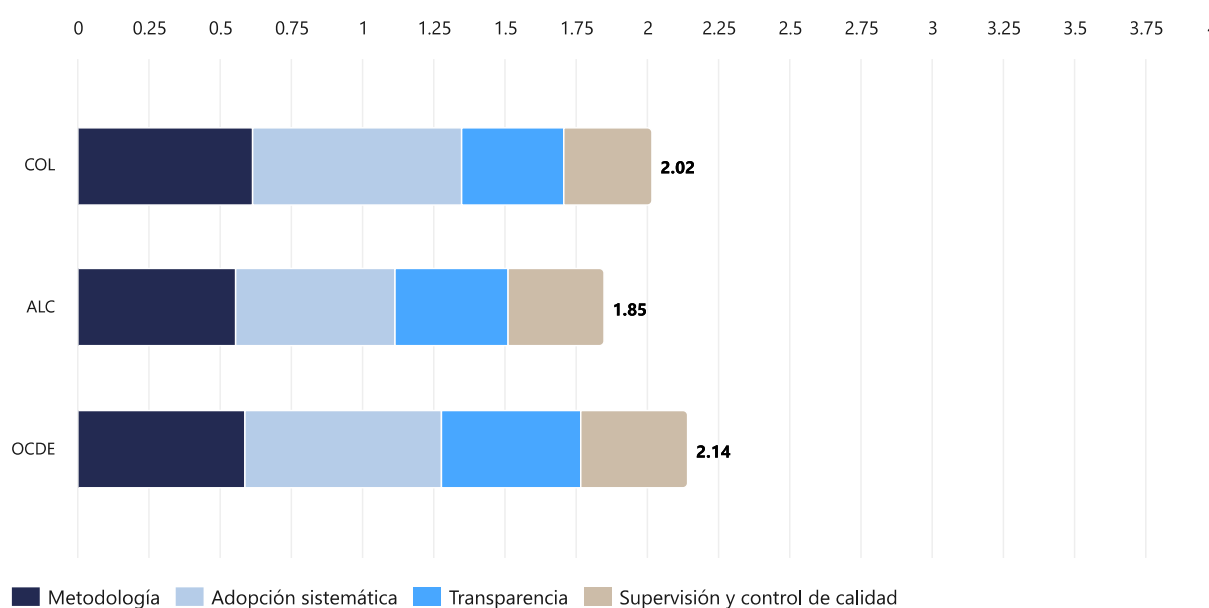
Gráfico 3. Contratación pública estratégica a nivel central para perseguir la sostenibilidad y la inclusión, 2022

	Compras verdes	PYME	Prácticas empresariales responsables
Se ha desarrollado una estrategia/política a nivel central	 Países de ALC: 9 Sí / 10 No	 Países de ALC: 14 Sí / 5 No	 Países de ALC: 7 Sí / 12 No
Algunas entidades de contratación han desarrollado una estrategia/política interna	 Países de ALC: 6 Sí / 13 No	 Países de ALC: 1 Sí / 18 No	 Países de ALC: 3 Sí / 16 No
No hay estrategia o política	 Países de ALC: 6 Sí / 13 No	 Países de ALC: 7 Sí / 12 No	 Países de ALC: 3 Sí / 16 No

Una participación significativa de las partes interesadas en la toma de decisiones contribuye a mejorar el diseño y la aceptación pública de las políticas y los servicios públicos. El Índice de Gobernanza y Política Regulatoria (iREG) de la OCDE evalúa la participación de las partes interesadas en la elaboración de regulaciones subordinadas (las aprobadas por el jefe de gobierno, los ministerios o el gabinete). Este indicador mide el desempeño de los países en involucrar sistemáticamente a las partes interesadas en la toma de decisiones públicas, el uso de herramientas, la transparencia de sus consultas y su supervisión y control de calidad. Entre 2019 y 2022, 8 de los 11 países de ALC encuestados (73%) mejoraron su puntuación iREG en participación de las partes interesadas.

Colombia se sitúa en línea con el promedio de ALC en el índice iREG de participación de las partes interesadas en la elaboración de regulaciones subordinadas. Con una puntuación global de 2.02, en una escala de 0 a 4, Colombia se sitúa por encima del promedio de ALC (1.85) y ligeramente por debajo del promedio de la OCDE (2.14). Colombia obtiene su puntuación más alta en la adopción sistemática (0.73 sobre una puntuación máxima de 1), seguida de la metodología (0.61). Hay margen de mejora en transparencia de la participación de las partes interesadas (0.36) y supervisión y control de calidad (0.31).

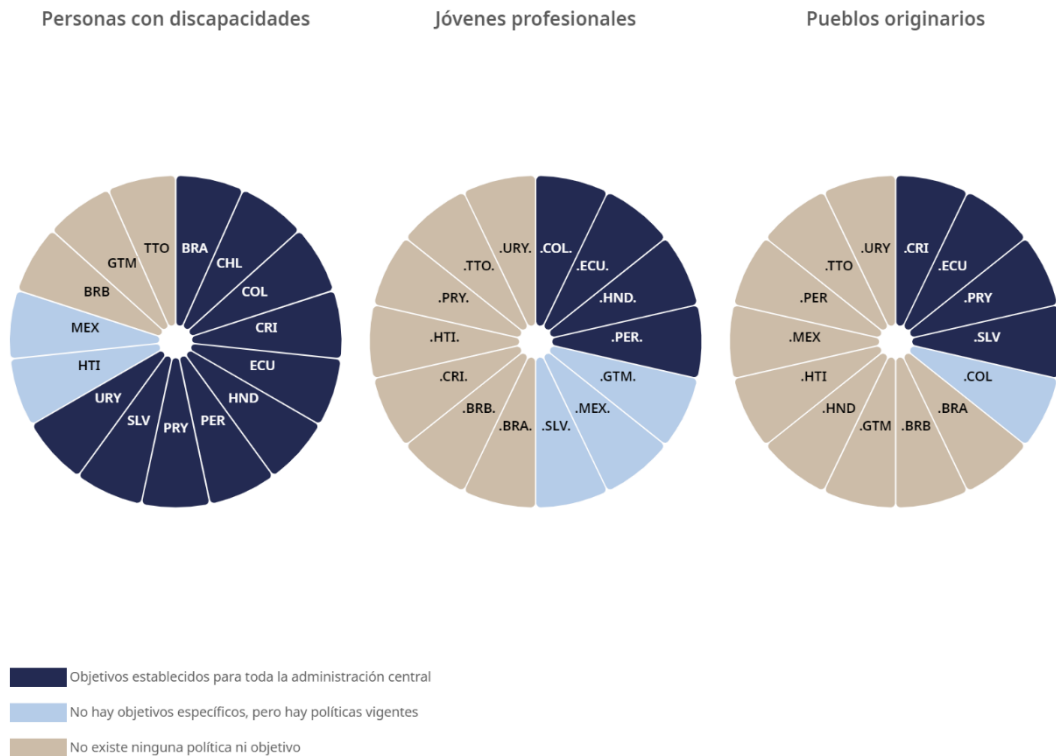
Gráfico 4. iREG sobre la participación de las partes interesadas en la elaboración de regulaciones subordinadas, 2022



Una fuerza laboral diversa en el sector público es esencial para promover la representación y la inclusión de los grupos infrarrepresentados y vulnerables. Refuerza el rendimiento del gobierno al impulsar la innovación y contribuir a servicios públicos adaptados a las necesidades de la comunidad. Los gobiernos pueden utilizar políticas y objetivos para contratar y retener a los grupos infrarrepresentados en la fuerza laboral.

Colombia ha establecido objetivos específicos para todo el gobierno central para la inclusión de personas con discapacidad y jóvenes profesionales en la fuerza laboral pública; y cuenta con políticas, pero no con objetivos para pueblos originarios. Entre los países de ALC encuestados, 10 de 15 tienen objetivos para las personas con discapacidad, 4 países tienen objetivos para jóvenes profesionales y para pueblos originarios.

Gráfico 5. Políticas y objetivos para mejorar la representación de grupos específicos en la administración central/federal, 2022

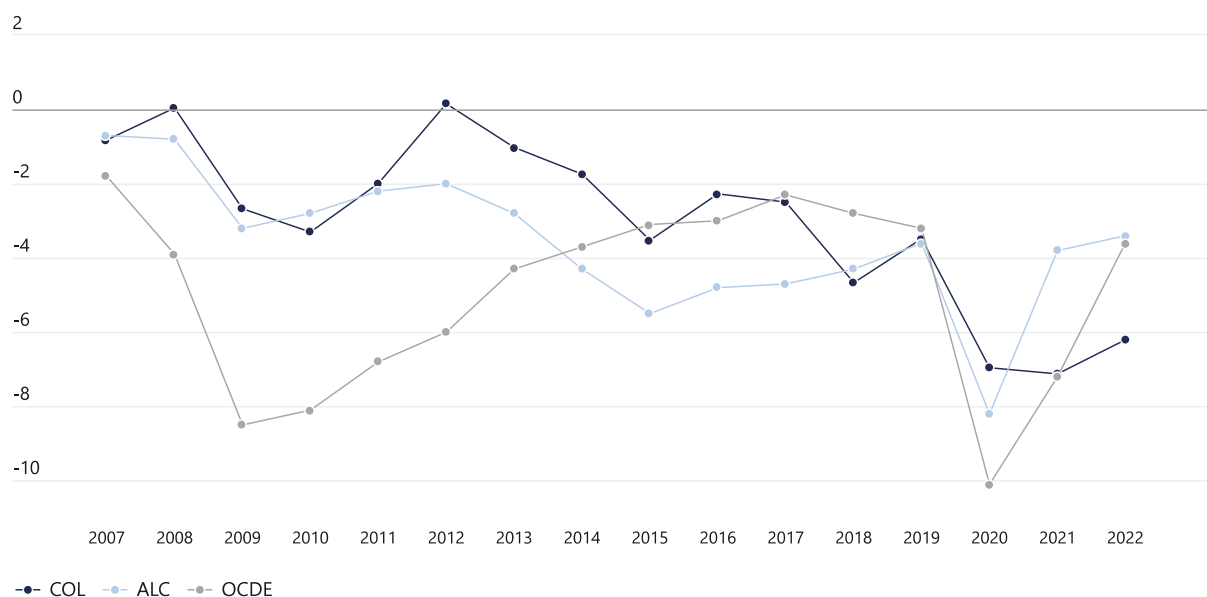


Uso y gestión de los recursos

Para lograr avances significativos hacia un crecimiento inclusivo y sostenible, los gobiernos deben gestionar sus recursos existentes de forma estratégica. Desde una perspectiva fiscal, esto implica equilibrar cuánto gasta y cuánto recauda el gobierno. Desde la perspectiva de los recursos humanos, significa reforzar la capacidad y las competencias de los empleados públicos y crear una fuerza laboral pública y oficiales públicos electos que representen a todas las personas a las que sirven.

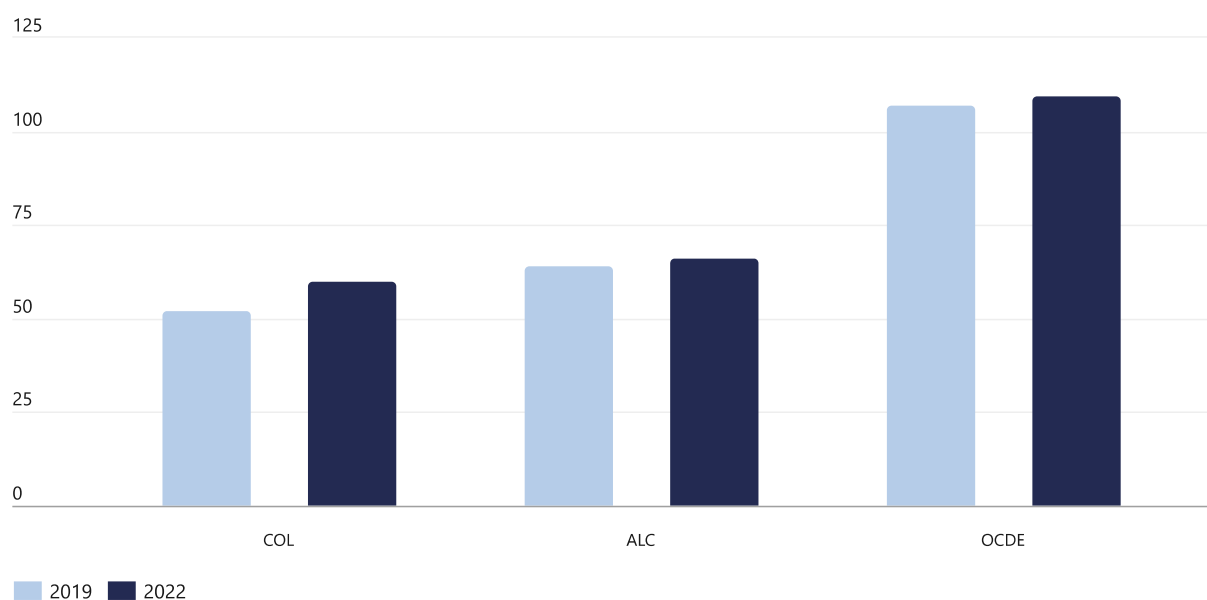
Las finanzas públicas de la región de ALC muestran modestos signos positivos, tras un marcado deterioro en 2020. Este deterioro se debió a las medidas de emergencia adoptadas para luchar contra la pandemia de COVID-19, y a las medidas de apoyo a las empresas y a las personas para gestionar su impacto. Para el 2022, los balances fiscales -la diferencia entre los ingresos y los gastos de un gobierno en un año- ya se habían recuperado ampliamente a los niveles anteriores a la COVID en toda América Latina y el Caribe. Sin embargo, la recuperación económica sigue siendo frágil.

En 2022, Colombia tuvo un déficit fiscal del 6.2% del PIB, mayor que el promedio de los países de ALC (3.4%), y un aumento desde el 3.5% de 2019. Los ingresos del gobierno representaron el 27.9% del PIB de Colombia en 2022, en comparación con el 31.5% en promedio en los países de ALC y el 39.7% en los países de la OCDE. Esta proporción de ingresos en relación con el PIB ha disminuido desde el 29.4% en 2019.

Gráfico 6. Balance fiscal de las administraciones públicas como porcentaje del PIB, 2007 - 2022

La deuda pública puede utilizarse para financiar tanto el gasto corriente como las inversiones, pero tiene un costo en forma de pago de intereses. La deuda como porcentaje del PIB aumentó durante la pandemia de COVID-19 en la región de ALC debido al aumento del gasto y a la pérdida de ingresos fiscales, y en 2022 aún se mantenía 2 p.p. por encima de su nivel de 2019.

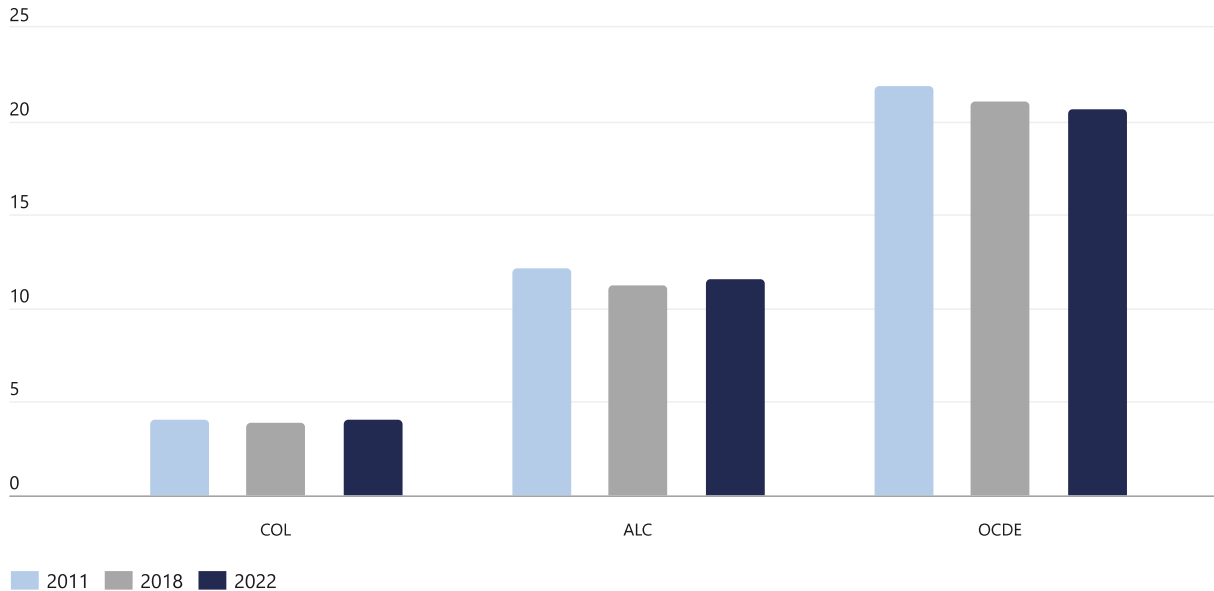
En 2022, la deuda pública de Colombia ascendía al 60.4% de su PIB, por debajo del promedio de ALC del 66.3%. El nivel de deuda del país ha aumentado desde el 52.4% del PIB en 2019.

Gráfico 7. Deuda bruta de las administraciones públicas como porcentaje del PIB, 2019 y 2022

Los empleados públicos están al frente del diseño y la formulación de políticas públicas y de la prestación de servicios públicos. La proporción del empleo público varía considerablemente en la región de ALC, desde menos del 5% del empleo total hasta más del 20%.

En 2022, el empleo público en Colombia ascendió al 4% del empleo total, muy por debajo del promedio de ALC del 12% y de la OCDE del 21%. El empleo público en Colombia se ha mantenido estable entre 2011 y 2022.

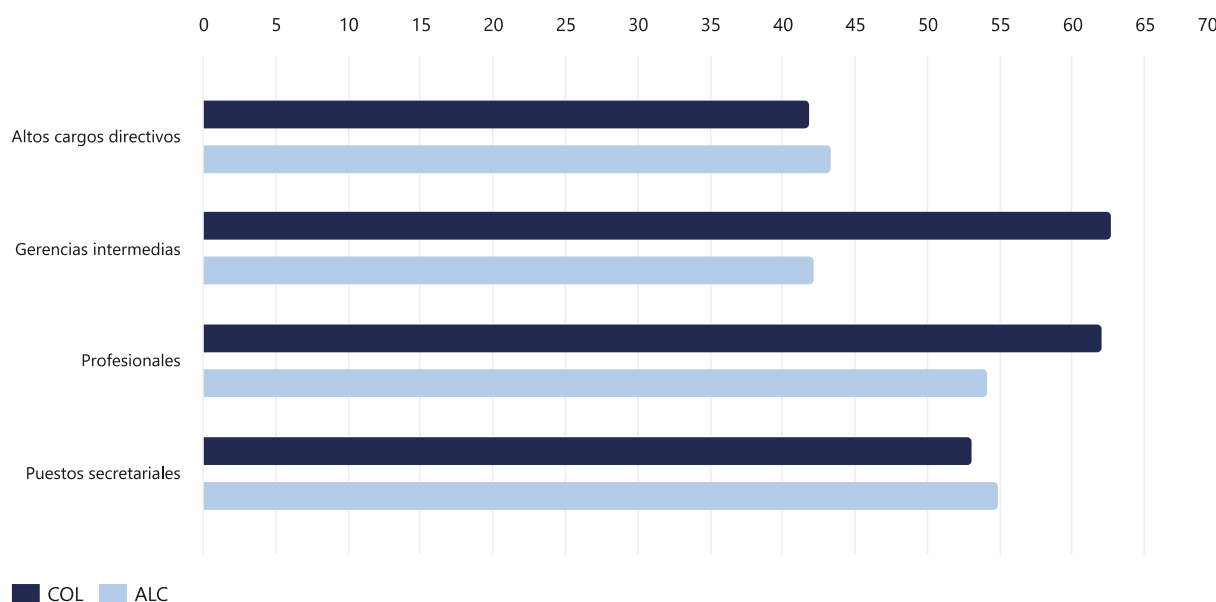
Gráfico 8. Empleo del sector público como porcentaje del empleo total, 2011, 2018 y 2022



La representación igualitaria de mujeres y hombres en el sector público es un punto de referencia para medir el progreso hacia la igualdad de género, la diversidad y una mejor representación. En 2021, más de la mitad de los empleados del sector público en los países de ALC eran mujeres (51.5%), con amplias diferencias entre países. Sin embargo, las mujeres suelen estar infrarrepresentadas en los puestos directivos de la región; en promedio, en 2022, las mujeres ocupaban el 43% de los puestos de alta dirección, con diferencias importantes entre países.

La proporción de mujeres en puestos directivos y mandos intermedios del sector público en Colombia es superior a la media de ALC. Las mujeres representan el 48.2% del empleo público, cerca del promedio de ALC, y ocupan el 41.9% de los puestos de alta dirección en Colombia, ligeramente por debajo del promedio de ALC del 43.4%. En los mandos intermedios, las mujeres ocupan el 62.7% de los puestos, muy por encima de la media de ALC del 42.3%.

Gráfico 9. Porcentaje de mujeres por puesto en la administración pública central/federal, 2022



Notas para los gráficos

Los datos sobre finanzas públicas y economía proceden de la base de datos de Perspectivas de la Economía Mundial (WEO) del FMI (octubre de 2023), que se basa en el Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas (MEFP) y se extrajeron el 3 de noviembre de 2023. Para los promedios de la OCDE, los datos se basaron en el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) y se extrajeron de la base de datos en línea Panorama de las Administraciones Públicas, que representa la última actualización disponible: 5 de enero de 2024.

El balance fiscal, también denominado capacidad (+) o necesidad (-) de financiación de las Administraciones Públicas, se calcula como el total de ingresos públicos menos el total de gastos públicos.

Los datos sobre empleo público proceden de la base de datos ILOSTAT de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y se extrajeron el 17 de febrero de 2023. Los datos se basan en la Encuesta de Población Activa. El empleo en el sector público abarca el empleo en el sector gubernamental más el empleo en empresas y sociedades residentes de propiedad pública.

Los promedios de ALC y la OCDE se refieren al promedio no ponderado, con la excepción de los indicadores de finanzas públicas.

Para más información, véase www.oecd.org/publication/government-at-a-glance-lac/2024/